Aviso legal

Capítulo del libro:	Intermediación política en la Montaña de Guerrero. Del caciquismo a la oenegización
Autor del capítulo:	Díaz Arroyo, Viviana
Forma parte del libro:	*Imágenes, representaciones y movilizaciones indígenas en Latinoamérica*
Autores del libro:	Soriano Hernández, Silvia; Rosa Quiñones, Isabel de la; Díaz Arroyo, Viviana; García Serrano, Fernando; Villa Avendaño, Anelí; Díaz Juárez, Daniel; Pulido Herráez, Begoña; Lisbona Guillén, Miguel; Ascencio Franco, Gabriel; Rajo Serventich, Alfredo; González Terreros, María Isabel
Colaboradores del libro:	Soriano Hernández, Silvia (coordinadora); Ramírez Soriano, Vania (ilustración de portada); Libertad bajo palabra (edición y diseño)
ISBN del libro:	978-607-30522-6-9
	Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-PAPIIT-IG400419
Forma sugerida de citar:	Díaz, V. (2021). Intermediación política en la Montaña de Guerrero. Del caciquismo a la oenegización. En S. Soriano (coord.), *Imágenes, representaciones y movilizaciones indígenas en Latinoamérica* (pp. 69-104). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe; Quadrivium Editores. https://rilzea.cialc.unam.mx/jspui/

D.R. © 2021 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510
Ciudad de México, México.

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510
Ciudad de México, México.
https://cialc.unam.mx
Correo electrónico: cialc-sibiunam@dgb.unam.mx

Los derechos patrimoniales pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este contenido en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0 Internacional). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es

Usted es libre de:
- Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- Adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo los siguientes términos:
- Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Pueden hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- Compartir igual: si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es

En los casos que sea usada la presente obra,
deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

Intermediación política en la Montaña de Guerrero. Del caciquismo a la oenegización

Viviana Díaz Arroyo

Resumen: El presente texto es un breve recorrido por diversos procesos de intermediación política ocurridos en la Montaña de Guerrero. Transformaciones de carácter global y nacional han repercutido ampliamente en las formas de organización a nivel comunitario; la aglutinación política, económica y cultural de estas dimensiones ha sido posibilitada por actores que, en diferentes periodos, han desarrollado el rol de traductores y han tornado legibles y necesarios los intereses implementados desde las jerarquías de poder, dentro de una sociedad verticalmente organizada. En ese sentido, el trabajo se encuentra enmarcado en un lapso temporal que abarca los cacicazgos de la década de 1950 hasta la aparición de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los noventa. Las reflexiones de carácter teórico que han acompañado a estas conexiones, son objeto de interés de este análisis.

Palabras clave: *brokerage*, local-global, me'phaa, na savi, nahuas

Introducción

Diversos son los aportes que el análisis en torno a la intermediación política genera respecto a una sociedad. Como primer elemento podría mencionarse la relación existente entre un Estado y su población a través de la concreción, en el ámbito local, de un marco político, económico y jurídico proyectado desde instancias de administración pública de carácter nacional o internacional. Otro aspecto que deriva de esta indagación, está vinculado al ejercicio del poder y a las múltiples formas

en las que se expresa, asimismo en la valoración simbólica y material que de lo político desarrollan las culturas en articulación así como a la compleja red de actores que participan en ella. Estos elementos situados en una dimensión temporal permiten atender la transformación e implementación de sistemas económicos, políticos y culturales de orden mundial dentro de la interpretación que de estos se realiza al interior de los espacios locales. El objetivo del presente trabajo radica en indagar cómo se ha desarrollado este complejo entramado en la región de la Montaña en el estado de Guerrero.

La intermediación, se ha efectuado históricamente de manera política, cultural y económica alrededor del mundo, ejemplo de lo anterior lo constituyeron las órdenes clericales, los caciques indígenas y los comerciantes que durante el periodo colonial desempeñaron el papel de articuladores de realidades opuestas. Empero, el marco contextual al que se ciñe el presente estudio refiere a la segunda mitad del siglo XX durante el entorno dictatorial experimentado en América Latina; las investigaciones vinculadas a la intermediación política que abordaron el periodo, aportaron elementos significativos para comprender las debilidades estatales en materia de gobernanza y control territorial. Para el caso uruguayo Filgueira indicó que entre las causas que explican la "crisis de gobernabilidad"[1] advertida en el país en la década de 1970, se encontró la caducidad de los canales de mediación política tradicionales, a decir: partidos políticos e instituciones estatales creadas para tal fin. Entre las problemáticas que derivaron en la suspensión de garantías individuales, estuvieron la ausencia de mecanismos de representación, en torno a la pluralidad de intereses detentados por la sociedad, y su inclusión dentro del aparato gubernamental. Así, durante la coyuntura de transición democrática propuso a la concertación como un mecanismo innovador de intermediación que, según su perspectiva, sería capaz de redistribuir e igualar el ejercicio del poder, al incorporar dentro del orden estatal la

1 Carlos H. Filgueira, "Mediación política y apertura democrática en el Uruguay" en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 47, núm. 2, México, UNAM, abr-jun, 1985, p. 54.

diversidad de aspiraciones que la sociedad uruguaya demandó al finalizar el periodo dictatorial.

Dentro de este panorama, el caso mexicano adquirió especial relevancia debido a lo que se denominó la "excepcionalidad en el ejercicio del poder";[2] esta consistió en la imagen divulgada respecto a la capacidad que tuvo el Estado –a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de un modelo político corporativista– de mantener la centralización, la estabilidad política y el autoritarismo estatal dentro de un sistema de representación política "plural" y, en contraste al resto de Latinoamérica, bajo un régimen presidencialista. Cabe señalar, que esta supuesta estabilidad radicó en la negociación que los poderes centrales del Estado establecieron con los poderes regionales. Lo anterior puede explicarse mediante el contexto de conformación Estado nacional posterior a la Revolución Mexicana.

La pretensión de los sectores gubernamentales posrevolucionarios de implementar un proyecto de Estado nación, se confrontó con una realidad caracterizada por la fragmentación sociopolítica, cultural y económica a lo largo del territorio; el poder en estos espacios estuvo detentado por líderes regionales poseedores de recursos –materiales y simbólicos– que les permitió afianzar el control o dominación en sus zonas de influencia a través de la parcial solución de las problemáticas que aquejaron a la población. La incidencia que a nivel regional o municipal ejercieron estos actores, significó un obstáculo al proyecto de centralización promovido por el incipiente Estado mexicano; por tanto, la estrategia utilizada para restar la autonomía que detentaron, consistió en su incorporación dentro del sistema político, a cambio de beneficios de índole económico o de prestigio orientados al goce individual; estos beneficios fueron alcanzados a través del control de canales de mediación que les permitió acceder a recursos que posteriormente harían descender a su clientela reforzando así su base de apoyo social. De esta forma, las funciones del inter-

2 Luis Rodríguez Castillo, "Antropología del poder y la política en México" en *Gazeta de Antropología*, 2010, 26 (2) [en línea].

mediario se enfocaron en dos aspectos: en primer lugar, tornaron deseable e inteligible el proyecto estatal en sus zonas de incidencia y, en segundo, generaron una serie de necesidades respecto a los bienes ofrecidos por el Estado, para originar la dependencia de las localidades y su posterior incorporación al centro del poder político.[3]

La relevancia que la intermediación adquirió durante este proceso puede observarse claramente en los esfuerzos por dinamizar el modelo económico capitalista en los espacios agrícolas. Es necesario enfatizar que las aspiraciones político-económicas mencionadas no pudieron concretarse sin el soporte de la intermediación cultural que efectuó la traducción –de normas, valores e ideas– de un modelo económico que además de ser ajeno en un contexto rural se constituyó contradictorio a las lógicas económicas de las poblaciones locales. Previo a describir este proceso en la región Montaña de Guerrero, cabría precisar conceptualmente a la intermediación política.

Aproximación teórico-metodológica a la intermediación

Entre los esfuerzos más destacables, por elucidar el término y por abordar críticamente el fenómeno, se puede mencionar el trabajo de Gisela Zaremberg y Adrián Gurza "Más allá de la representación y del clientelismo: hacia un lenguaje de la intermediación política".[4] La importancia que otorgan a la ampliación del concepto se encuentra dirigida a teorizar un hecho que ha sido reducido dentro del análisis académico de lo político, al posicionar como parámetro positivo de repre-

3 Guillermo de la Peña, "Poder local, poder regional, perspectivas socioantropológicas" en Padua, Jorge y Alain Vennehp (comp), *Poder local, poder regional*, México, Colmex-CEMCA, pp. 27-56.

4 Adrián Gurza Lavalle y Gisela Zaremberg, "Más allá de la representación y el clientelismo hacia un lenguaje de la intermediación política", en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, núm. 221, may-ago 2014, México, UNAM, Nueva Época, pp.19-50.

sentación o intermediación política directa al proceso electoral y al clientelismo como el único modelo de mediación informal y por tanto perjudicial al sistema democrático, empañando así la diversa gama de expresiones empíricas que posee la intermediación. Para aclarar estos postulados, valdría referir las acepciones básicas de los términos "intermediar" e "intermediación". El significado del primero, remite a la solución de conflictos –siendo las interpretaciones del área jurídica predominantes– también hace alusión a la "acción de facilitar, lograr, conectar intercambios económicos";[5] en lo que a intermediación respecta el Diccionario de la Real Academia de la Lengua señala: "actuar poniendo en relación a dos o más personas o entidades para que lleguen a un acuerdo"[6] asimismo "mediar entre dos o más personas, y especialmente entre el productor y el consumidor de géneros o mercancías".[7]

El sentido de la primera expresión muestra el carácter imparcial del intermediador, es decir, la incidencia que ejerce en la solución al conflicto no le provee ningún tipo de beneficio; los estudios enfocados en la intermediación jurídica o laboral se han apegado a esta definición asociando al Estado o a las organizaciones de la sociedad civil el carácter de mediadores públicos, universales y de postura neutral. En contraste, en la segunda acepción se aprecia que la articulación entre dos instancias puede generar lucro o dividendos a quien la efectúe; si bien, esta significación corresponde más a los procesos de intermediación económica, la producción académica orientada hacia el clientelismo y sus "personificaciones sociológicas" (caciques, punteros, padrinos políticos, gamonales, caudillos, cabos electorales)[8] se ha apoyado en esta conceptualización para evidenciar el carácter negativo en este modelo de intermediación. El propósito del trabajo de Gurza y Zaremberg consiste en señalar que las experiencias de mediación política se manifiestan en un amplio campo social y, por ende, no

5 *Ibid.,* p. 25.
6 Diccionario de la Real Academia Española citado en *idem.*
7 *Idem.*
8 *Ibid.,* p. 21.

pueden ceñirse a dos expresiones que, además de acotar su ejercicio, la adjetivan entre la correcta y la perjudicial intermediación; para comprobar sus argumentos esbozan una metodología basada en el cubo de la intermediación de la política indirecta; su descripción trasciende los objetivos del presente texto, por esta razón baste referir el significado que ambos autores han otorgado al término:

> La intermediación política es la mediación ejercida en sentido vertical por un actor con ventajas posicionales que establece relaciones entre ciudadanos e/o individuos, actores colectivos, organizacionales e institucionales, por un lado, e instancias de autoridad pública localizadas en niveles superiores. La intermediación política asume así una connotación ascendente, por lo que el concepto de intermediación política recién formulado no es aplicable a relaciones simétricas o que no operan en sentido vertical ascendente. La lógica descendente existe y, por ejemplo, forma parte de la dinámica de la representación política ("regreso a las bases", "proximidad con el elector"), pero la representación sólo existe porque supone la posibilidad de escalar demandas, necesidades o preocupaciones [...] El intermediador es un actor con ventajas posicionales, es decir, ejerce la intermediación porque puede hacerlo gracias a las asimetrías de poder vigentes [...] Las características de la intermediación política no se derivan únicamente de posiciones estructurales ventajosas en una red de relaciones, sino más bien, que esta posición está asociada también a atributos de los actores como riqueza, estatus social, género, nivel educativo, los cuales nutren las asimetrías de la intermediación política.[9]

La mediación política puede realizarse de manera formal a través de los canales que el Estado ha creado para tal efecto, de acuerdo con Gurza y Zaremberg, el modelo por antonomasia de intermediación política formal son: el proceso electoral, los partidos políticos e instituciones federales. Por otro lado, se encuentra la mediación ejercida desde canales informales de representación la cual, al encontrarse fuera de los marcos estatales de control, ha sido adjetivada como perjudicial al sis-

9 *Ibid.,* pp. 20 y 30.

tema democrático, esta apreciación se sustenta en el modelo de intermediación política informal más estudiado es decir el clientelismo, no obstante, mediaciones de carácter informal trascienden a este modelo.

A lo largo del texto, se han reiterado las nociones de articulación y vinculación, estas acciones son fundamentales dentro de los procesos de mediación porque permiten comprender las relaciones entre lo macro y lo micro, además de su concreción y dinamización en espacios diferenciados. Entre los aportes más relevantes que han arrojado las investigaciones en torno al tema, se encuentran los que están vinculados al ejercicio del poder y a lo que De la Peña denominó "la dimensión espacial del poder de clase";[10] lo que han mostrado estos estudios es que en la estructura vertical, a través de la cual opera la intermediación política, existen zonas diversificadas y en cada una las relaciones de poder se manifiestan de manera específica. Es importante señalar, que los propósitos de centralización e implementación de un sistema económico capitalista estuvieron mediados por los intereses que a nivel local detentó la clase dominante, no obstante, en este periodo, ni las élites económicas regionales habían alcanzado el dominio absoluto del espacio como tampoco lo había hecho el Estado, ahí la relación de dependencia entre ambos actores. Aunado a ello se encuentra el sistema de normas y valores culturales en cada contexto; la idea de la propiedad individual de la tierra y de la percepción salarial, o de la individualización de las prácticas laborales, así como la dinamización del libre mercado, resultaron ajenas en espacios en los que el usufructo agrícola se ejercía de manera colectiva y para autoconsumo, o donde el trabajo se desarrolló comunitariamente a través del tequio o de la reciprocidad, por esta razón, es que la participación de los intermediarios fue imprescindible para la materialización de los objetivos gubernamentales, estos al conocer ampliamente el contexto lingüístico y cultural, del que también formaron parte, lograron socializar y materializar los proyectos a través de los cuales se logró el centralismo político, haciendo

10 Guillermo de la Peña, *op. cit.*, p. 41.

legible y necesaria una realidad previamente ajena, de ahí el mote de traductores con el que también se denomina a estos agentes. El tercer aspecto, y el más relevante dentro del proceso de intermediación, es la red de actores que la concreta y dinamiza, señalado previamente, los intermediarios pueden operar en el ámbito económico, político y cultural, y transitar en ellos, el estudio amplio de su ejercicio es importante para la profundización empírica de lo mencionado hasta ahora.

Los actores de la intermediación política: un acercamiento conceptual al cacique

Dentro de un sistema en el que se ha desarrollado una distribución desigual de los bienes y servicios se entiende que algunas personas hayan alcanzado privilegios que les han posibilitado movilizarse en la estructura vertical de administración gubernamental. Estos beneficios no son exclusivos del ámbito económico, existen también los referentes al prestigio alcanzado por diversos motivos –el nivel educativo por ejemplo–; las relaciones sociales al exterior de las localidades; aspectos culturales vinculados a la capacidad de hablar dos idiomas aunado a un elemento que podría parecer banal como es el factor generacional. Así, al aludir la articulación de distintos niveles,[11] se expone también una compleja red de individuos e instituciones que dentro de los espacios formales e informales ejercen esta conexión, denominados también *brokers* o traductores, el estudio de su actividad ha mostrado una imbricada trama de patronazgo y clientelismo que se expresa en los niveles de mayor jerarquía dentro del gobierno. La acción de los mediadores ha sido aprovechada por las dimensiones sociopolíticas más amplias para insertarse en los espacios locales y, de la misma manera, los intermediarios al concientizar la importancia de su posición han sabido generar beneficios que pueden transitar del plano individual al colectivo. Cabe aclarar

11 Eric Wolf señaló siete niveles de integración: el grupo doméstico, el barrio, la comunidad, el municipio, la microregión, la macroregión y la nación, *Ibid.*, p. 33.

que la producción académica orientada a la sociopolítica, se ha enfocado ampliamente en un arquetipo de mediador, sin embargo, es necesario precisar que el cacique no es el único modelo de intermediación que opera en la informalidad, existen investigaciones, como las de Gurza y Zaremberg,[12] cuyo propósito radica en constatar la existencia de redes de intermediación informal o indirecta de carácter representativo.

Al intentar este trabajo dar cuenta de cómo se expresa este entramado en la región de la Montaña de Guerrero, se considera adecuado señalar lo que la literatura antropológica ha aportado en torno al caciquismo. Así, el cacique es aquel individuo que mediante el control de recursos estratégicos ejerce el dominio político-económico de la población y de la región donde habita. La materialización de este poder se ha expresado a través de los canales de representación política formal cuando, por ejemplo, detenta el cargo de presidente municipal; la informalidad de su ejercicio puede observarse al momento de designar a las personas que ocuparán este y otros cargos de relevancia, lo destacable del proceso radica en el reconocimiento que realizan los agentes gubernamentales de su función: "los cacicazgos constituyen instancias de gobierno extraoficiales que mantienen, sin embargo, algún acuerdo en orden general con la autoridad central"[13] no obstante, no poseen ningún tipo de responsabilidad hacia su base de apoyo social y tampoco hacia las autoridades gubernamentales. La red de apoyo que sostiene los cacicazgos, se cimienta en lazos de parentesco –consanguíneo o ritual– y en relaciones de patronazgo, clientelismo y corporativismo; cuando estos canales resultan insuficientes la violencia opera como mecanismo de control.[14] Al exterior de la región y en instancias superiores de administración, se ha encargado de construir una serie de alianzas que favorecen y posibilitan

12 Gurza y Zaremberg, *op cit.*

13 Fernando I Salmerón Castro, "Caciques una revisión teórica sobre el control político local", en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, vol. 30, núm. 117-8, México, jul-dic, 1984.

14 Pablo González Vargas, *Lealtades de la sumisión. Caciquismo*, México, El Colegio de Michoacán, 1993.

su intermediación, esta se encuentra compuesta por actores que detentan prestigio e inciden política o económicamente dentro de la estructura gubernamental, entre ellos: médicos, abogados, diputados y gobernadores.

El intermediario es consciente de lo estratégico que resulta su rol como articulador, por esta razón opera como un "amortiguador"[15] es decir, enfrenta los conflictos que surgen de las conexiones entre el ámbito nacional y comunitario, sin resolverlos totalmente. Por el contrario, y de acuerdo con Wolf,[16] los potencializa para garantizar así su permanencia dentro del sistema. Debido a ello ejerce un control monopólico de las redes sociales en las que circula, evitando cualquier comunicación directa entre el ámbito local y nacional.[17] Mostrar su efectividad es imprescindible para garantizar su respaldo social, en consecuencia genera beneficios para la localidad, que generalmente residen en el mejoramiento de la infraestructura y la introducción de obras públicas y servicios, estrategia que ha favorecido la incorporación del ámbito comunitario al sistema económico global.[18]

La incorporación de esta ideología, no hubiera sido posible sin el ejercicio de la mediación cultural, al respecto la investigación de Olivia Pineda[19] resulta ilustrativa; para los fines de este apartado baste mencionar que fueron los maestros bilingües y rurales los encargados de efectuar esta tarea. En síntesis, el control que los caciques detentaron del ámbito cul-

15 Eric Wolf, "Aspects of Group Relations in a Complex Society: México" en *American Anthropologist,* New Series, vol. 58, núm. 6, dic., 1956.

16 *Ibid.*

17 Fernando Salmerón, *op. cit*.

18 La introducción del "progreso y la modernidad" a los municipios correspondió al análisis efectuado por Luisa Paré respecto al papel del cacique como introductor del capitalismo en sociedades no capitalistas; su actuación como intermediario económico posibilitó dinamizar la circulación de mercancías al integrar dentro de la economía local los productos e insumos industriales y viceversa; de igual manera, introdujo el sistema ideológico vinculado con la acumulación, la especulación y despojo. *Cfr.* Luisa Paré, "Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla", en Roger Bartra *et al*, *Caciquismo y poder político en el México rural*, México, IIS-UNAM/Siglo XXI, 1975.

19 Luz Olivia Pineda, *Caciques culturales (el caso de los maestros bilingües en los Altos de Chiapas)*, México, Altres Costa-Amic, 1993.

tural, político y económico a nivel regional, contribuyó en el mantenimiento de la estabilidad política nacional, al contener mediante prebendas los conflictos que pudieron derivar del descontento social; por otro lado, coadyuvó en la imagen que el Estado y el partido oficial construyeron en torno a la legitimidad del sistema político a través de la participación "de sus dominados"[20] dentro del proceso electoral o como "apoyo" en los eventos organizados por estos.

El espacio de enunciación: la Montaña de Guerrero

¿Cómo se concretó lo desarrollado hasta ahora en la región Montaña de Guerrero? Como primer aspecto valdría situar el espacio de enunciación. En la actualidad, resulta intrincado delimitar geográfica, cultural o económicamente a la Montaña, debido a que los criterios utilizados para referenciarla han variado de acuerdo con los intereses y con los actores que la mencionan. En este trabajo, se considera fundamental lo señalado por Sarmiento[21] en cuanto a que los espacios son un constructo social que dotan de sentido tanto a los procesos que se generan en su interior como a quienes, mediante un sentimiento de pertenencia e identidad, los habitan. En ese sentido, las regiones se constituyen como un constructo material y simbólico dinamizado por sus ocupantes; este hecho resulta fundamental en la demostración de agencia de las colectividades e individuos dentro de las localidades. Aunado a ello, se encuentran las interpretaciones que en torno a la Montaña han elaborado el Estado y la academia así, atendiendo a las intenciones del presente, se recurren a aquellos constructos que permiten explicitar el campo de la intermediación política en este espacio. En primer lugar, se alude a la obra de Maurilio

20 Fernando Salmerón, *op. cit.*

21 Sergio Sarmiento Silva, "Alcozauca: entre la resistencia y la esperanza. Contribución de los actores sociales y políticos del cambio democrático en Guerrero. Los ensayos de gobierno de la izquierda y la construcción de ciudadanías", tesis de doctorado, México, FCPyS UNAM, 2010.

Muñoz denominada *Mixteca-Nahua-Tlapaneca*,[22] este trabajo es producto de las aspiraciones estatales por implementar una política pública indigenista en esta zona, además, la descripción minuciosa que realiza en torno a ella permite observar y comprender hechos visibles en la actualidad.

La mixteca-nahua-tlapaneca se ubica en el noroeste del estado de Guerrero, abarca una extensión territorial de 11,480 km^2 y está integrada por 20 municipios.[23] Comprende entre 13% y 17.81% de la superficie total del estado. Ocupa una parte del macizo montañoso de la Sierra Madre del Sur y por esta condición las tierras aptas para producción agrícola son escasas. El clima va de cálido a frío de acuerdo con la posición y el nivel de altura en la cordillera; debido a sus condiciones geográficas fue adjetivado como un área aislada, entre las razones que explican esta situación se menciona la carente infraestructura. Hasta la década de 1960 existieron pocas carreteras que conectaron las ciudades ubicadas en frontera o con relevancia político-económica, es decir: Chilapa, Tlapa y Huamuxtitlán, el resto de los traslados se efectuaron en avioneta, a caballo o a pie, a decir de Muñoz los recorridos realizados por la población que no contó con los recursos para acceder a algún transporte llegaron a alcanzar dos días.

Su composición demográfica es predominantemente indígena, habitando el espacio las comunidades me' phaa, na savi y nahuas –como prefieren autodenominarse–, el cotejo entre la observación etnográfica del autor con los censos poblacionales de las décadas de 1950 y 1960, mostró la precarización en la que posicionaron a estas poblaciones, evidenciada en: los bajos índices educativos; una alta tasa de mortandad

22 Maurilio Muñoz, *Mixteca-Nahua-Tlapaneca,* México, INI, 1963.

23 La cantidad de municipios acotados a la Montaña ha variado conforme el tiempo y los autores que la abordan, así como con los procesos de municipalización que se llevaron a cabo en el espacio. De acuerdo con el INEGI la componen: Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copalillo, Copanatoyac, Cualac, Chilapa, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatonoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán y Zitlala. *Cfr.* INEGI, *Atlas ejidal del estado de Guerrero. Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal, 1988,* México,1990 [en línea].

infantil; la reducida expectativa de vida y causas de muerte vinculadas con enfermedades curables. Aunado a ello, se encontró la estratificación espacial, sobre esto menciona Muñoz que las tierras poco favorables para las actividades agrícolas fueron ocupadas por población indígena, esta situación derivó en una diversificación de actividades que, de manera precaria, les posibilitó cubrir necesidades básicas, entre las primeras se pueden mencionar las labores artesanales como el tejido de palma y de sombrero o los oficios vinculados con la industria textil. Los trabajos desarrollados por me'phaas, na savi y nahuas fueron mal remunerados quedando las ganancias en manos de los intermediarios económicos así como de la población mestiza que a su vez fue propietaria de talleres e industrias. Al respecto, cabría señalar que la exclusión social del espacio se manifestó en la calidad de la infraestructura, en la cantidad de servicios –agua, luz, drenaje, teléfono, medios de transporte, escuelas, hospitales– y en la presencia de industrias manufactureras que detentaron los centros de poder regional; se ha mencionado que los municipios de Chilapa, Tlapa y Huamuxtitlán contaron con vías de comunicación terrestre, la misma situación se presentaba en materia de espacios productivos, aunado a los bienes y servicios. Cabe destacar que la población predominante en estos municipios fue mestiza, con esto se pretende observar el carácter segregacionista y racista que imperó en la región.

¿Comunidades cerradas? Geopolítica indígena en la Montaña

Esta sucinta descripción se inserta en un debate en torno a los estudios sobre geopolítica. Lo relevante de esta discusión radica en que los aspectos a través de los cuales se analizaron la relación entre el espacio, la geografía y el poder se trasladaron hacia las personas que los habitaron, de esta manera surge el concepto de comunidad cerrada por medio del cual se afirmó la condición de aislamiento

en la que supuestamente se encontraron las poblaciones indígenas. En correspondencia, se publicó la obra *Regiones de refugio* donde se explica que la incomunicación espacial experimentada por estas comunidades, derivó en su subdesarrollo cultural (manifestado en la lengua y la vestimenta) y económico (expresado en prácticas como el tequio); en ese sentido el indigenismo se constituyó como la vía a través de la cual los grupos originarios podrían superar su condición de atraso mediante su incorporación a los proyectos de modernidad nacional; la materialización de esta incorporación, a decir de Aguirre Beltrán, se alcanzaría con un amplio desarrollo infraestructural –expresado en vías de comunicación terrestre– y con la introducción de bienes y servicios en las comunidades –escuelas, hospitales, drenaje, electricidad–. En la concreción de este propósito tanto los Centros Coordinadores Indigenistas (CCI), como los promotores bilingües, desarrollaron un papel fundamental.[24]

De acuerdo con Andrés Medina, la idea en torno al aislamiento e incomunicación en el que se encontraron las poblaciones indígenas fue rechazada poco tiempo después a su enunciación, así el indigenismo, a decir del autor, se constituyó como la estrategia político-cultural a través de la cual se implementó un modelo industrial desarrollista en espacios no capitalistas.[25]

La inserción de este modelo en la región Montaña de Guerrero, puede ubicarse con el arribo del CCI de Tlapa en el año 1963, hecho que generó profundas repercusiones en las lógicas de organización del lugar debido a la recomposición que realizó sobre las estructuras de poder. Este contexto fue examinado por Dehouve en su obra *Ensayo de geopolítica indígena*,[26] en ella demuestra que los pueblos originarios se han encontrado incorporados al Estado nación a través de la adaptación que la normativa indígena ha realizado sobre el marco jurídico

24 Gonzalo Aguirre Beltrán, *Regiones de refugio: El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica*, México, FCE, 1996.

25 Andrés Medina Hernández, "La región de refugio reconsiderada" en *Jornadas de homenaje a Gonzalo Aguirre Beltrán*, Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, 1988 pp. 35-49.

26 Danièle Dehouve, *Ensayo de geopolítica indígena*, México, CIESAS, 2001.

estatal. Para confirmar sus argumentos parte del análisis de los espacios con menor jerarquía en la estructura administrativa, es decir: municipios, comisarías y delegaciones, asimismo de la crítica al concepto de comunidad cerrada porque al definir al espacio y a sus pobladores como algo estático se excluyeron del análisis los mecanismos de poder y dominación al interior de las localidades.

Su área de estudio se concentra en los municipios me'phaa de la región, a decir: Zapotitlán Tablas, Tlacoapa y Malinaltepec. De forma ceñida, se presenta su propuesta con la intención de visibilizar los procesos y los actores que participaron en las redes de intermediación del periodo. Así, el primer aspecto a señalar radica en las aspiraciones que detentaron los habitantes de las delegaciones y de las comisarías por alcanzar un grado mayor en la administración territorial, para el primer caso convertirse en comisarías y para el segundo transformarse en municipio. El factor que impulsó la movilización de los elementos que se describen a continuación, fue el acceso a la tierra, situación que se explica a través de las facultades que tuvieron los municipios y específicamente los alcaldes para tomar las decisiones en torno a estos espacios. En otras palabras, el hecho de que una delegación alcanzara el grado de comisaría o de que esta lograra convertirse en municipio, evitaría las obligaciones que por normativa federal debía cumplir con las estructuras superiores de organización, pero más importante facilitaría la regulación de los ejidos o bienes comunales. Precisamente en la reglamentación jurídica impuesta desde la federación, es que puede observarse la relación y la incorporación de las poblaciones indígenas al ámbito nacional, lo relevante del proceso radica en la respuesta que a través de la normativa local dieron estas comunidades al marco legislativo y más importante la manera en que se ejerció el poder al interior de las comunidades, demostrando así que las poblaciones indígenas no fueron entes homogéneos y mucho menos ajenos a las lógicas nacionales.[27]

27 *Ibid.*

Son cuatro ámbitos dentro de la estructura organizativa local que, refiere Dehouve, se movilizaron para alcanzar mayor grado en la jerarquía administrativa, estos se combinaron de acuerdo con los intereses y las necesidades de los pobladores y se constituyeron en: político, agrario, educativo y religioso. En lo concerniente al campo político, se puede reiterar la dimensión formal e informal que operó bajo este ámbito, sobre la primera se mencionan las disposiciones gubernamentales para el ejercicio del poder dentro de estos espacios, así el municipio fue la entidad que a nivel local recibió mayores potestades, toma de decisiones, así como la redistribución de los escasos recursos financieros que recibía se ejerció desde el ayuntamiento, el cual operaba en el centro político del territorio. Los cargos en quienes recayeron estas funciones consistieron (en orden de jerarquía): presidente municipal, síndico regidor, regidores, policía judicial y municipal. En categoría menor se encontraron los comisariados y los delegados quienes representaron la autoridad formal al interior de sus espacios. Hasta la década de 1970 el rol de estos ciudadanos fue el de intermediarios entre el Estado y las poblaciones indígenas, esto se debió a que la relevancia de su cargo fue limitada, quienes ocuparon estos puestos generalmente eran los jóvenes del territorio y lo hicieron como un servicio que por normativa indígena era obligatorio en la comunidad, cabe destacar que hasta este periodo no recibían ninguna percepción salarial por estas actividades, y aunque en lo "formal" obtenían el cargo a través del proceso electoral, en la práctica fueron elegidos mediante asamblea comunitaria. Este hecho conduce a lo informal de lo político; en este ámbito fueron las autoridades tradicionales o consejo de principales quienes en lo empírico decidieron el destino de la región; este consejo generalmente estuvo compuesto por los hombres mayores de la comunidad quienes habían cumplido con los servicios o cargos estipulados por la organización política indígena, y el ejercicio de su poder en los hechos estuvo legitimado mediante la asamblea, que se constituyó como el órgano para la elección de autoridades y espacio de discusión política al interior del municipio.[28]

28 *Ibid.*

De esta estructura no se puede separar el ámbito religioso por la incidencia que ambas dimensiones tuvieron entre sí. Es decir, el sistema de cargos constituyó una parte esencial de la organización sociopolítica indígena la cual se encontraba ligada a las festividades. Quienes se encargaron de materializarlas fueron las mayordomías, las cuales eran elegidas mediante asamblea y como parte del servicio a la comunidad fueron también las encargadas de cubrir financieramente los eventos, el mayordomo al cumplir su función dentro de la estructura administrativa aspiraba a ascender en la categoría de cargos estipulados por la normativa indígena. Lo destacable de este proceso, es que durante estas ceremonias se llevaron a cabo las asambleas para la elección de autoridades políticas formales (presidentes municipales, síndicos), esto se debió a que dichas actividades se realizaron en la cabecera municipal y se aprovechaba la asistencia de los integrantes de las comisarías y delegaciones, por esta razón, es que estas celebraciones no sólo se constituyeron como espacios de convivencia religiosa ya que sus implicaciones políticas fueron relevantes al interior de la comunidad.[29]

La misma situación se puede señalar para las autoridades agrarias. A diferencia de los cargos religiosos, los comisariados ejidales o de bienes comunales sí contaron con el reconocimiento oficial del Estado. La presencia de estos actores dentro de los municipios obedece al reconocimiento legal de la dotación de tierras producto de las reformas cardenistas. Al convertirse en una figura política formal, el papel de estas autoridades consistió en la intermediación de las decisiones agrarias entre los ejidatarios o comuneros y las instituciones federales encargadas de este ámbito. Al interior del municipio, la existencia de esta figura generó diversas conflictividades, esto se debió a que los habitantes reconocidos dentro de este sistema lograron dirimir asuntos del orden político-administrativo dentro de la instancia agraria, lo que representó una desventaja para aquellos comuneros que no contaron con los

29 *Ibid.*

títulos territoriales. Si bien, esta situación resultó estratégica en la solución a diversos inconvenientes, la figura del comisariado ejidal o comunal se encontró supeditada a la del presidente municipal, por esta razón las decisiones políticas de mayor alcance estuvieron bajo la jurisdicción del ayuntamiento.[30]

Otra figura reconocida e implementada por la legislación federal fueron los maestros rurales y los promotores bilingües, una particularidad que puede señalarse en torno al magisterio radica en la incidencia política informal que ejercieron en las localidades. Las aspiraciones educativas por parte de la población indígena a inicios de la década de 1960 fueron mínimas, entre otras condiciones por la lejanía de los centros educativos, por la inversión económica que representó la asistencia escolar, así como por la necesidad que detentaron las familias rurales de que todos sus integrantes contribuyeran con el sustento. En la región de la Montaña existieron tres tipos de educadores: los profesores contratados desde las instancias federales; los contratados por la administración estatal y los promotores bilingües. La presencia de los primeros al interior de las comisarías fue escasa además percibieron salarios mayores a los de sus colegas y generalmente provenían de contextos urbanos pertenecientes a otros estados de la república, por tanto no conocían los idiomas de la población y sus funciones se centraron en los espacios privilegiados de la región. Los profesores estatales a pesar de ser originarios del estado de Guerrero tampoco hablaron me'phaa, tu'un savi o nahuatl y si bien su presencia en las comunidades era frecuente, su trabajo en la docencia no fue tan representativo.[31] Diferencia sustancial con los promotores bilingües, que más que ejercer un trabajo de docencia ejercieron el papel de promotores culturales, su función primordial radicó en implementar el proyecto indigenista en la región. La diferencia que estos actores tuvieron frente a los otros docentes radicó en el hecho de que fueron originarios de las comunidades, por ende, no sólo conocían el idioma sino que comprendían ampliamente

30 *Ibid.*
31 Maurilio Muñoz, *op. cit.*

el contexto del espacio, constituyéndose así como intermediarios culturales. El acercamiento que tuvieron con sus comunidades de origen y la postura privilegiada que alcanzaron como mediadores les permitió incidir en los procesos políticos de la región, esta situación derivó en un conflicto interno entre el magisterio debido a que los docentes estatales y federales ejercieron la misma influencia política en sus áreas de trabajo. Cabe precisar que la figura del maestro en la Montaña, hasta el día de hoy, cuenta con un amplio prestigio.[32]

Referenciados de manera sucinta los actores que dinamizaron los procesos de intermediación en la región hasta la década de 1970, cabe enfatizar la figura del municipio como campo de interacción y materialización del poder político. En primer lugar, habría que señalar que la cabecera municipal se convirtió en el espacio de mediación por excelencia, dicho en otras palabras, fue la cara a través de la cual la dimensión nacional se incorporó al nivel comunitario. Al ayuntamiento se dirigían los estatutos oficiales y la normativa legal planeada desde el ejecutivo, asimismo los limitados recursos financieros para su posterior reparto entre localidades; de manera inversa, los trámites que requerían ser tratados en instancias superiores de gobierno –por ejemplo el ascenso de categoría administrativa– tuvieron que contar con el visto bueno de las autoridades municipales. En la cabecera también se realizaban las asambleas y ahí tomaban posesión no sólo el alcalde, sino comisariados y delegados; durante las fiestas patronales los santos de las comunidades bajaban al centro a saludar al santo patrón de la cabecera, teniendo en cuenta lo señalado por Muñoz respecto a los trayectos al interior de la región, es comprensible que los habitantes desearan romper la dependencia hacia este centro.

En síntesis, lo que se pretende acentuar es que el ayuntamiento municipal como centro de poder político no fue un espacio neutro, las facultades administrativas con las que el Estado dotó este nivel generaron una serie de privilegios a

32 *Ibid.*

quienes detentaron el poder formal; esta situación supo ser aprovechada por el poder central para disponer de los bienes y trabajo de los pobladores de jerarquías menores. En contraposición, los integrantes de las localidades movilizaron los recursos que tuvieron a su alrededor para romper la dependencia con las estructuras mayores y alcanzar además de un grado superior de organización política formal, el reconocimiento de la propiedad territorial. A este contexto habría que incorporar las disposiciones que el poder federal generó al interior de los espacios. Con la intención de ejemplificar lo señalado hasta ahora se recurre a la siguiente descripción.

Valdría mencionar los requisitos que una delegación debía cubrir para convertirse en comisaría, entre ellos: tener una población mayor a 500 habitantes y que el 30% estuviera alfabetizada; contar con la infraestructura adecuada para ejercer la función administrativa, es decir edificios para la escuela y la comisaría, además como requisito para una vida higiénica, se debían detentar servicios públicos como drenaje. En la competencia por convertirse en un espacio con mayores facultades estos elementos se asociaron como símbolos de prestigio, así los materiales con los que se realizaron; la presencia de profesores y la mayor cantidad de servicios al interior de un espacio, se volvieron los factores movilizados dentro el ámbito político local. Estas actividades se sustentaron mediante el trabajo de los pobladores; a través de la construcción, del aporte material o de tiempo para su realización. Asimismo, existieron condiciones para que un municipio pudiera ser reconocido como tal, en ese sentido la disgregación de las instancias menores restaba fuerza a la entidad e implicaba consecuencias en el control político. Por ende, existió una negativa por parte de las autoridades formales a colaborar en estos procesos, ejemplificadas en la detención de los trámites, en la no realización de los censos, o en la ocupación de mano de obra para la mejora de los edificios públicos del ayuntamiento. En este proceso los profesores desarrollaron un papel fundamental en el ámbito político, orientando a las poblaciones sobre el marco legislativo o redactando los oficios a través de los cuales soli-

citaron su cambio de dependencia, fue frecuente que los promotores bilingües colaboraran en los espacios comunitarios y que el resto de los docentes apoyaran a la autoridad formal, situación que se explica por los beneficios que implicaban las relaciones sociales con los sectores privilegiados que a su vez ocuparon los espacios económicamente favorecidos. Otro aspecto que resulta interesante subrayar, es que el proceso de modernización puesto en marcha por el indigenismo, aprovechó las estructuras de organización política informal para materializarse, particularmente lo que se denominó tequio y que autores como Aguirre[33] señalaron como un factor de atraso en las comunidades. Se hace referencia a la construcción de la infraestructura moderna, específicamente carreteras, sustentados en el trabajo comunitario y gratuito. La conjugación de los elementos formales e informales de lo político, también se observó en el nivel religioso; era durante las ceremonias indígenas que se tomaban las decisiones político administrativas del municipio mediante la elección de las autoridades oficiales.

Atendiendo este panorama se comprende la dificultad que tuvieron los integrantes de las localidades para alcanzar un grado mayor dentro de la estructura administrativa, el tiempo invertido en las obras municipales o federales, impidieron el mejoramiento de sus espacios e incluso interfirieron en su labores de subsistencia. En conjunto, este contexto desmitifica la idea de aislamiento y estaticidad con la que se caracterizó a las poblaciones indígenas, por el contrario muestra los conflictos en las unidades menores de administración, así como los actores y las redes que se construyeron tanto al interior como hacia las dimensiones mayores de organización. Situación modificada durante la década de 1970 cuando la población optó por la vía armada para transformar sus condiciones de vida y por el terrorismo de Estado implementado como respuesta ante el descontento social.

33 Gonzalo Aguirre Beltrán, *op. cit.*

La intermediación política en contextos de guerrilla, comunismo y terrorismo de Estado

Ocurre que si el análisis de la relación Estado-localidad durante las décadas de 1950 y 1960 se orientó hacia el debate sobre la incorporación de la población indígena a la "sociedad mayor"; en la década siguiente, los factores que vincularon la relación de las instancias federales y municipales estuvieron enmarcados en lógicas de violencia. Algunas especificidades pueden señalarse para la región Montaña.

Como primer elemento, valdría recordar la división regional del estado de Guerrero, debido a que la experiencia armada protagonizada por los profesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, tuvo como escenario de expresión a la región Costa Grande; la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y el Partido de los Pobres (PDLP) no solo se convirtieron en un referente del movimiento guerrillero nacional, sino que se constituyeron en el justificante idóneo para la intervención militar del Estado. Estos grupos de autodefensa, se insertaron en un ámbito internacional caracterizado por la presencia guerrillera en Latinoamérica y África, además con el triunfo de la Revolución Cubana que, por un lado, confirmó a la vía armada como una estrategia factible para la toma del poder político[34] y, por el otro, suscitó el temor entre las élites globales que la percibieron como una amenaza y, en respuesta, implementaron una política de contrainsurgencia a lo largo del continente americano. A nivel nacional, el movimiento armado de Guerrero se vinculó con la aspiración generalizada de estudiantes, obreros, campesinos y profesionistas de lograr la democratización de la vida política y económica del país.[35]

La bibliografía que aborda este proceso es extensa, para los fines del presente, se considera necesario señalar los as-

34 Abel Barrera Hernández y Sergio Sarmiento "De la montaña roja a la policía comunitaria" en Verónica Oikión Solano y Marta Eugenia García Ugarte (eds) *Movimientos armados en México siglo XX*, Zamora, Colmich, CIESAS, vol. III, 2006.

35 Armando Bartra Verges, *Guerrero bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande,* México, Era, 2000.

pectos referidos a la intermediación. En ese sentido, destaca la observación desarrollada por Vázquez en torno al cacique capitalista. La conclusión que el examen elaborado por sectores de izquierda arrojó de la estructura caciquil fue la reducción del fenómeno a un proceso caduco que interfirió con el desarrollo económico del país, por ende su erradicación se concebía necesaria para alcanzar un sistema democrático al interior de las localidades. En palabras del líder:

> El resultado de semejante concepción para la izquierda en su complicidad con el sistema, al no identificar al cacique con el capitalismo, llama a luchar contra los "residuos feudales" y en la práctica a favor de un desarrollo capitalista supuestamente democrático. La ACG, en cambio, identifica claramente el centro del poder capitalista rural en el cacique y, por tanto, se enfrenta abiertamente al capitalismo.[36]

Otro aporte derivado de los análisis efectuados por Vázquez y Cabañas consiste en la denuncia contra la extracción irracional de bienes naturales –particularmente forestales y minerales– y las condiciones de vida de los pobladores dentro de las estructuras caciquiles. Si bien, el panorama fue compartido a lo largo del estado, ciertas especificidades explican el por qué la región de la Montaña no se insertó completamente en la dinámica armada.

Entre las interpretaciones que esclarecen este hecho, se encuentran las vinculadas con las condiciones fisiográficas del estado, específicamente las que intermedian entre la región de la Costa Grande y la Montaña, en este espacio, denominado Costa Chica, el paisaje se encuentra caracterizado por amplias extensiones de llanura y zonas costeras, estas condiciones fueron poco propicias para la seguridad y el establecimiento de células armadas imposibilitando su expansión hacia otras geografías. Por otro lado, se encuentran las narrativas tendientes a la recuperación de la memoria, así, algunos investigadores y

36 Alberto Guillermo López Limón, *¡Comandante Genaro Vázquez Rojas: presente!*, México, Editorial Brigada Roja, 2012, p. 44 [en línea].

militantes[37] han preferido difundir la vía democrática a través de la cual los pobladores intentaron transformar sus condiciones de vida, se hace referencia al periodo gubernamental de izquierda desarrollado en el municipio de Alcozauca durante la década de 1980.

Dos circunstancias posibilitan comprender la opacidad con la que se ha tratado la presencia de actores armados en la Montaña: en primer lugar, se encuentra el estereotipo construido en torno a los guerrerenses por su temperamento violento; de tal forma, visibilizar la participación electoral que le otorgó el triunfo al Partido Comunista (PC) en el estado, evidencia la postura pacífica a través de la cual las comunidades incidieron políticamente en el territorio; en segundo, se menciona la política contrainsurgente que derivó en una grave violación a los derechos humanos por parte del ejército. La persecución de grupos guerrilleros y de simpatizantes de izquierda a lo largo del estado, tuvo como consecuencia la imposición de un panorama de terror expresado en prácticas como la tortura y abuso sexual, en asesinatos extrajudiciales así como en desapariciones y desplazamientos forzados, razones vitales para negar cualquier conexión con estos actores. Lo cierto, es que en la región Montaña existieron núcleos armados vinculados a la ACNR y al PDLP; Sarmiento[38] documentó la presencia de bases de apoyo en los municipios de Olinalá, Tlapa y Huamuxtitlán, señaló la relación entre el magisterio y Carmelo Cortés –integrante del PDLP y fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)– y el trabajo de convencimiento que efectuó en la región en torno a la opción de las armas. Por su parte, López[39] elucidó la incorporación de los habitantes de los municipios: San Luis Acatlán –lugar de nacimiento de Genaro Vázquez–, Tlacoapa, Malinaltepec y Azoyú al proceso cívico estatal, a través de la movilización que enar-

37 Abel, Barrera Hernández y Sergio Sarmiento, *op. cit.*

38 Sergio Sarmiento Silva, "Alcozauca: entre la resistencia y la esperanza. Contribución de los actores sociales y políticos del cambio democrático en Guerrero. Los ensayos de gobierno de la izquierda y la construcción de ciudadanías", tesis de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, México, FCPyS UNAM, 2010.

39 Alberto López, *op. cit.*

bolaron en contra de las prácticas de usura e intermediación detentadas por los caciques de estas localidades, a decir del autor la presencia de estos grupos en la región se mantuvo hasta el año de 1974. Dato relevante del contexto, radica en el papel de mediadores que ejercieron los guerrilleros, éste consistió en la intervención a la solución de conflictos vinculados con la delimitación territorial y delitos como robo y al alcoholismo.

La introducción de un ideario de izquierda al interior de la Montaña, no se inauguró con el movimiento armado de los años setenta, su precedente se ubica en el marco del programa de educación socialista impulsado por Lázaro Cárdenas en 1940. El magisterio ha sido uno de los principales promotores de esta ideología, su papel como intermediario cultural y político, ha posibilitado la concreción de múltiples proyectos con este carácter, entre ellos el triunfo del PC a la alcaldía de Alcozauca. Diversos elementos se conjugaron para esta victoria, en lo correspondiente al ámbito nacional se puede mencionar la coyuntura que en 1977 la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) propició a la disidencia política. Producto del incremento de organizaciones armadas a lo largo del país, de la inestabilidad económica y de un descontento generalizado debido a la represión gubernamental, la administración de José López Portillo impulsó esta reforma tendiente a abrir los canales democráticos de participación, a través del registro oficial de aquellos partidos que operaban desde la clandestinidad. Tal fue la situación del PC que durante la década de los setenta realizó una serie de transformaciones a su estructura que lo llevó a optar por la legalidad e incorporarse al proceso democrático formal; además, la coyuntura electoral derivó en un reforzamiento de las bases de apoyo partidario en las municipalidades, para el caso de este partido se puede señalar a un intermediario emblemático de la Montaña: Othón Salazar Ramírez.[40]

Su rol como mediador se visibilizó a través de la incorporación del profesorado de la región al Movimiento Revolucio-

40 Sergio Sarmiento, *op. cit.*

nario Magisterial que en 1958 se sumó a la protesta nacional por la mejora de los derechos laborales de los trabajadores. Fueron las condiciones económicas del magisterio las que posibilitaron la difusión de un ideario de izquierda. Acontecimiento que se explica por la segregación socioespacial en Alcozauca. Como se mencionó previamente, la pugna entre el magisterio estatal y los promotores bilingües consistió en la diferencia de privilegios que detentaron los primeros, esta situación se trasladó a los dirigentes políticos y a los agentes con elevada capacidad económica, quienes se conformaron como el núcleo de poder al interior de la región. Tres ejes aglutinaron a estos actores: su origen mestizo, su afiliación al partido del Estado y su concentración en la cabecera municipal. Así, la presencia del PC en Alcozauca se concibió como la coyuntura que podría transformar el orden del municipio, esta posibilidad fue aprovechada por el magisterio local y por la población indígena quienes vieron la oportunidad de acceder a espacios de poder previamente negados.[41]

La estrategia que le otorgó el triunfo al comunismo en Alcozauca consistió en la campaña llevada a cabo en los espacios con menor jerarquía en el municipio, la labor del magisterio simpatizante con el PC consistió en convencer a la población, mayoritariamente na savi, de votar por la izquierda; se prometió una mejora en las condiciones económicas de las comunidades a través de un reparto justo de los bienes recibidos por la alcaldía. Destaca del proceso, el sentimiento de representación política que por vez primera percibió la población al escuchar en su lugar de origen y en su idioma los discursos de los aspirantes al poder político; los candidatos del PC fueron los primeros en recorrer las localidades para exponer su proyecto, la labor de traducción correspondió al magisterio.

La gestión del PC en Alcozauca fue la primera mediación política formal que propuso una transformación a la estructura de marginación que imperaba a lo largo del estado. A ni-

41 *Ibid.*

vel nacional la idea de un gobierno comunista generó amplias expectativas que implicaron el ingreso de actores ajenos a la Montaña, entre ellos: los académicos que conformaron el Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos (PAIR); actores vinculados con la teología de la liberación; además de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el partido oficial como Antorcha Campesina. Estos grupos, aunados a los mediadores políticos tradicionales: magisterio, representantes de partidos y jóvenes migrantes del municipio, imprimieron dinámicas novedosas de intermediación equiparables con el asistencialismo que marcó la década de los noventa. No obstante, el entusiasmo derivado del cambio de gobierno fue disminuyendo durante los diez años de su gestión, entre otros elementos por: la nula experiencia administrativa del PC, manifestada en un abandono de los comités centrales al gobierno local; la escasa vinculación de los alcaldes con una ideología de izquierda que derivó en la implementación de prácticas idénticas a las de gestiones anteriores; y más relevante, la estructura de poder no experimentó ninguna modificación, si bien existió una renovación de la dirigencia política, la segregación socioeconómica y racista permaneció, afectando directamente a la población indígena.[42]

De ayuda internacional, desarrollo, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales

La década de 1990 fue el escenario de convergencia y enunciación de exigencias que para algunos sectores de la sociedad resultaron novedosas, no obstante, los movimientos asociados con la identidad étnica o de género; las acciones por la defensa al entorno natural; y las organizaciones que abogaron por el derecho a la libertad sexual, se han encontrado históricamente en la agenda política de sus protagonistas. Estas masivas protestas, se enmarcaron en la tendiente mundialización de los ámbitos político y cultural, así como en la consolida-

42 Sergio Sarmiento, *op. cit.*

ción de un sistema económico neoliberal y en una vertiginosa transformación científico-tecnológica. Las herramientas para el análisis de estos fenómenos quedaron rebasadas ante tales expresiones; en lo referente a la intermediación política, la conexión entre los ámbitos local-nacional e internacional derivó en una diversificación de actores, lenguajes y escenarios que requirieron la innovación de sus postulados.

Para el propósito del artículo, cabe señalar las aportaciones compiladas por Mosse y Lewis[43] referentes a los procesos de mediación y traducción en el contexto de cooperación y ayuda para el desarrollo. El orden político, económico y cultural de fin de siglo, implicó una acelerada interacción entre los diferentes niveles de articulación social; esto conllevó a una proliferación de canales de intermediación enfocados en la conexión de un escenario intercultural y por ende de racionalidades distintas que involucró actores en esferas económicas, identitarias y con intenciones diferenciadas, todo enmarcado en las especificidades jurídico-económicas de la administración Estado-nacional.

Dentro de este contexto, la antropología adquirió un rol protagónico, debido al papel desarrollado por sus profesionales al interior de las instituciones para el desarrollo. Esta situación requirió la profundización de los postulados orientados a la mediación, que transitaron de un enfoque centrado en la agencia de los actores y de las vías utilizadas para concretar la articulación de realidades contrapuestas, a otro que ponderó el análisis de la red de actores que intervienen en la cadena de intermediación, a través del estudio de los contenidos e intereses que se traducen en su interior y posibilitan su concreción. El concepto de traducción propuesto por Bruno Latour[44] se ha retomado en estas investigaciones, para aclarar como en racionalidades distintas, en las que intervienen múltiples objetivos, lenguajes, discursos, recursos y materiales, los actores establecen interpretaciones y producen significados

43 David Lewis y David Mosse, *Development brokers and translators: the ethnography of aid and agencies*, s/l, Kumarian Press, 2006.
44 *Ibid.*

que posibilitan la materialización de las lógicas del desarrollo, en síntesis: "la traducción es la mutua imbricación de intereses que producen realidades".[45]

Otro aporte que se desprende del estudio, radica en el cuestionamiento al concepto *interface*[46] o a lo que en este trabajo se ha denominado nivel de articulación; en el sentido en que si bien la intermediación es necesaria para conectar realidades contrapuestas, el foco de atención debe girar en torno a lo que propicia que en espacios tan heterogéneos, dentro de los que la agencia de los individuos se manifiesta a partir de la consecución de sus propios intereses, se lleve a cabo una interconexión y no una fragmentación de realidades. Ejemplo de esto lo constituye el enfoque crítico y deconstructivista de la antropología que señala el carácter impositivo e intervencionista de los programas de desarrollo dentro de las decisiones político-económicas de los países. En efecto, numerosas investigaciones han mostrado los impactos negativos de estos programas en materia de autonomía, no obstante y de acuerdo con Mosse y Lewis,[47] la dicotomía que establece: países occidentales donadores y por tanto ejecutores de agendas político-económicas particulares, frente a los países del, mal llamado, tercer mundo, como receptores y agentes pasivos de fondos y programas, resulta insuficiente a la comprensión del fenómeno. Baste señalar que son los consumidores de estos programas, quienes a través de la negociación de sus objetivos personales posibilitan la materialización de las políticas públicas del desarrollo.

La Montaña de Guerrero no quedó exenta de este panorama, la introducción de programas de desarrollo, localmente conocidos como "ayudas" o "apoyos" generaron implicaciones tan relevantes que derivaron en la transformación geopolítica de la región y de acuerdo con Dehouve "a partir de los noventa [...] la lucha por los recursos financieros ha sustituido

45 Traducción propia, *Ibid.,* p. 13.
46 *Ibid., p.* 10.
47 *Ibid.*

o por lo menos desplazado a la lucha por la tierra".[48] Una comprensión integral del proceso requiere incorporar las consecuencias producto de la violencia experimentada en el estado desde el año de 1970.

De esta manera, se explica que las inversiones dirigidas a la erradicación de la pobreza extrema en Guerrero, se hayan otorgado paralelamente a la expansión de los movimientos armados. El incremento de este financiamiento y de la presencia de dependencias gubernamentales, como la Procuraduría Social de la Montaña para Asuntos Indígenas o la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), se observó durante la década de los ochenta. El propósito que la narrativa oficial asignó a este financiamiento, radicó en una supuesta solución a las condiciones de marginación en que se encontraron las poblaciones indígenas del estado, a través de la modernización de la infraestructura y de la introducción de servicios de salud y educativos. No obstante, el trasfondo que acompañó a esta derrama económica consistió en la desmovilización y despolitización de la población por medio de recursos monetarios, para evitar de esta manera su adhesión a la lucha armada o el triunfo del comunismo en otros municipios.[49]

La acentuación de dicha estrategia se expresó en la década de 1990 a través de proyectos como: el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), Programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y el Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa), en el primero el reparto financiero se realizó a través de las alcaldías para su posterior distribución en comisarías y delegaciones; en el caso del segundo y tercero, la ayuda se entregó de manera individual. Aunado a ello, se encontró la modificación legal que promovió la remuneración de cargos que previamente se realizaban de manera gratuita, entre otros: alcaldes, síndicos y policías. El monto destinado para el desarrollo social de los municipios ascendió a un millón de pesos, cantidad nunca antes percibida en estos espa-

48 Danièle Dehouve, *op. cit.,* p. 267.
49 Abel Barrera y Sergio Sarmiento, *op. cit.*

cios.[50] Sumado a estas modificaciones, se encuentran el auge del multipartidismo y la aparición de organizaciones autodenominadas de la sociedad civil y ONG como son: el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular; el Frente de Defensa Popular; el Consejo de Autoridades Indígenas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan).

En conjunto, este escenario generó importantes consecuencias en materia de intermediación política. En primera instancia, propició la confrontación entre los habitantes de los espacios locales por ocupar los puestos de representación oficial; en segundo lugar, el acceso a los recursos financieros se encontró mediado por los partidos políticos, en ese sentido, la adhesión de la población a los programas de desarrollo dependió de su afiliación partidista y de las redes de poder que facilitarían la ayuda económica, a nivel local esta situación derivó en una grave fragmentación social expresada en conflictos intracomunitarios; la situación con las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o independientes, no se diferenció mucho de las anteriores, esto se explica porque el acceso al financiamiento fue controlado por las instancias estatales, en ese sentido, estos organismos se encontraron supeditados a las decisiones provenientes de estructuras mayores, aunado a ello se pueden mencionar el ejercicio de prácticas de carácter asistencialista o clientelar que contribuyeron a la desmovilización política de la sociedad guerrerense.[51]

En resumen, el panorama político en la Montaña de Guerrero a final del siglo XX, mostró una compleja trama de intermediación que imbricó actores, intereses y objetivos que se movilizaron en torno al financiamiento para el desarrollo. La forma en que se materializó esta ideología atravesó por una cadena de intermediación que incorporó estructuras internacionales que fueron traducidas por mediadores –denominados en este periodo "gestores"–[52] y materializadas por

50 Danièle Dehouve, *op. cit.*
51 Abel Barrera y Sergio Sarmiento, *op. cit.*
52 Danièle Dehouve, *op. cit.,* p. 167.

agentes sociales que, a través de la relación beneficiario de programas=base de apoyo político, posibilitó la interconexión de realidades heterogéneas. A lo largo del trabajo se ha reiterado la incidencia que el contexto de violencia ha generado sobre los procesos socioeconómicos del estado, la intermediación política ha respondido a este panorama mediante la conformación de organismos tendientes a promover una cultura de los derechos humanos en la Montaña que derivé en el acceso a la justicia y a la reparación de los agravios. A las políticas de contrainsurgencia de la década de los setenta, se sumó la militarización estatal bajo pretexto de la erradicación de cultivos ilícitos y de supuestos brotes guerrilleros producto de la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. La presencia del ejército en la región, ha significado una grave violación a los derechos humanos de la población.

En este contexto surge el CDHM Tlachinollan con el propósito de erradicar las causas que originan esta violencia, el análisis de su labor, desde una perspectiva de intermediación política, se considera necesario debido a las vetas de investigación que ha generado, entre ellas: se puede cuestionar si existe un carácter reivindicativo de la intermediación política –como el propuesto por Gurza y Zaremberg–.[53] Asimismo, el papel de las bases sociales en los procesos de intermediación; hasta el momento se ha observado cómo operan las cadenas de mediación de la estructura superior a la inferior, si bien, estos enfoques reconocen la agencia de las poblaciones en los niveles de articulación menores, no se ha desarrollado como opera el proceso a la inversa, es decir, los elementos simbólicos y materiales que movilizan los intermediados para alcanzar sus objetivos. En suma, estos factores conducen a un interrogante mayor vinculada a la importancia de la mediación política, como el único canal para la conexión entre las estructuras internacionales, nacionales y locales, tomando en cuenta el papel que la autonomía y la autodeterminación han jugado en los procesos de organización política de los pueblos indígenas.

53 Gurza y Zaremberg, *op. cit.*

A manera de conclusión

Este sucinto recorrido por los procesos de intermediación política en la región de la Montaña de Guerrero, ha permitido señalar la vigencia y relevancia que esta práctica posee en el ámbito político del país. Su estudio, no sólo posibilita comprender las conexiones entre las dimensiones macro y micro estructurales, sino que al incorporar el análisis de la agencia individual advierte las especificidades que caracterizan al proceso. El estudio de los flujos de mediación, respecto a los contenidos, a las traducciones, a los intereses y a la red de actores que posibilitan su concreción aporta elementos sustanciales en el entendimiento del poder y del sistema político mexicano.

El análisis del proceso en una dimensión temporal, muestra las adaptaciones y la interconexión que el Estado y los actores han desarrollado respecto a las transformaciones globales. Así el estudio de caso de la Montaña de Guerrero, ha mostrado la trayectoria del orden político mexicano que ha transitado de una red de negociaciones locales de poder, que otorgaron la pauta para calificar la estructura política estatal como clientelista, a una de carácter asistencialista fundamentada en los programas de desarrollo social acorde con los proyectos de ayuda internacional. Este panorama, se ha nutrido de una compleja imbricación de actores e intereses que no sólo ha posibilitado su concreción, sino que ha enfatizado las incongruencias entre los discursos oficiales de lo político y el ejercicio del poder, la misma situación puede mencionarse respecto a las bases sociales. Los proyectos reivindicativos o de izquierda en la Montaña, mostraron su incapacidad para realizar una transformación estructural de las condiciones de marginación experimentadas por los habitantes, por el contrario, visibilizaron las estrategias que posibilitaron movilizar sus intereses dentro de las cadenas de intermediación. En igual orden de ideas, se encuentra la población intermediada, que ha respondido de acuerdo con la valoración de sus objetivos a los procesos de mediación, en ocasiones materializándolos

a través del consumo de los programas de desarrollo, u obstaculizándolos mediante la confrontación directa con los sectores gubernamentales.

En ese sentido, se coincide con lo argumentado por Mosse y Lewis, respecto al sentido dicotómico que han adquirido los procesos de intermediación, en cuanto a sus correctas o perjudiciales prácticas o al carácter pasivo o impositivo de los actores que intervienen en el proceso. Por el contrario, la profundización de las relaciones entre lo internacional, lo nacional y lo comunitario, a partir de un enfoque de intermediación política, debe abordarse incorporando el conjunto de elementos –materiales y simbólicos– que se encuentran en juego para su concreción, esto permitirá tener un acercamiento a la realidad del fenómeno y no a los supuestos que orbitan en los polos de la estructura.

Finalmente, se ha observado, que los estudios en torno a la mediación han colocado el centro de atención en la relación vertical que desciende de las estructuras mayores de organización política hacia las bases de la misma. En este trabajo, se propone un cambio de enfoque que tienda a enfatizar el proceso de manera inversa, es decir, puntualizar la agencia de las bases sociales a través del análisis del ascenso de sus demandas e intereses dentro de la estructura de intermediación. Atendiendo el panorama global de la actualidad, se considera pertinente observar este proceso ante los retos políticos y económicos que representa el afianzamiento de un modelo económico sustentado en el extractivismo.

Fuentes consultadas

Bibliografía

Aguirre Beltrán, Gonzalo, *Regiones de refugio: El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica*, México, FCE, 1996.

Barrera Hernández, Abel y Sergio Sarmiento, "De la montaña roja a la policía comunitaria" en Verónica Oikión Solano y Marta Eugenia García Ugarte (eds) *Movimientos armados en México siglo XX*, Zamora, Colmich, CIESAS, vol III, 2006.

Bartra Verges, Armando, *Guerrero bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande,* México, Era, 2000.

De la Peña, Guillermo, "Poder local, poder regional, perspectivas socioantropológicas" en Padua, Jorge y Alain Vennehp (comp), *Poder local, poder regional*, México, Colmex-CEMCA, pp. 27-56.

Dehouve, Danièle, *Ensayo de geopolítica indígena*, México, CIESAS, 2001.

Filgueira, Carlos H, "Mediación política y apertura democrática en el Uruguay" en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 47, núm. 2, México, UNAM, abril-junio, 1985, p. 54.

González Vargas, Pablo, *Lealtades de la sumisión. Caciquismo*, México, El Colegio de Michoacán, 1993.

Gurza Lavalle, Adrián y Gisela Zaremberg, "Más allá de la representación y el clientelismo hacia un lenguaje de la intermediación política" en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, núm. 221, mayo agosto 2014 México, UNAM, Nueva Época, pp.19-50.

INEGI, *Atlas ejidal del estado de Guerrero. Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal, 1988*, México, 1990, disponible en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1329/702825112479/702825112479_1.pdf#[2,{%22name%22:%22Fit%22}].

Lewis, David y David Mosse, *Development brokers and translators: the ethnography of aid and agencies*, s/l, Kumarian Press, 2006.

López Limón, Alberto Guillermo, *¡Comandante Genaro Vázquez Rojas: presente!*, México, Editorial Brigada Roja, 2012, p. 44, disponible en https://ernesto147.files.wordpress.com/2012/02/comandante-genaro-vc3a1zquez-rojas.pdf (consultado el 20 de septiembre de 2019).

Medina Hernández, Andrés, "La región de refugio reconsiderada" en *Jornadas de homenaje a Gonzalo Aguirre Beltrán*, Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, 1988.

Muñoz, Maurilio, *Mixteca, Nahua, Tlapaneca,* México, INI, 1963.

Paré, Luisa, "Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla" en Roger Bartra, *et al*, *Caciquismo y poder político en el México rural*, México, IIS-UNAM/Siglo XXI, 1975.

Pineda, Luz Olivia, *Caciques culturales (el caso de los maestros bilingües en los Altos de Chiapas)*, México, Costa-Amic, 1993.

Rodríguez Castillo, Luis, "Antropología del poder y la política en México" en *Gazeta de Antropología*, 2010, 26 (2), disponible en https://www.ugr.es/~pwlac/G26_30Luis_Rodriguez_Castillo.html.

Salmerón Castro, Fernando I, "Caciques una revisión teórica sobre el control político local" en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, vol. 30, núm. 117-8, México, jul-dic 1984.

Sarmiento Silva, Sergio, "Alcozauca: entre la resistencia y la esperanza. Contribución de los actores sociales y políticos del cambio democrático en Guerrero. Los ensayos de gobierno de la izquierda y la construcción de ciudadanías", tesis de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, México, FCPyS UNAM, 2010.

Wolf, Eric, "Aspects of Group Relations in a Complex Society: México" en *American Anthropologist,* New Series, vol. 58, núm. 6, dic., 1956.